



ENLACE

OFICINA EN WASHINGTON PARA ASUNTOS LATINOAMERICANOS (WOLA) • MARZO DE 2005



EN ESTA EMISIÓN

La agenda de comercio y desarrollo.....	2
Desafíos en Colombia.....	4
Actividades de WOLA.....	6
Autoridad de la guerra contra las drogas.....	10

Fotos por el archivo de WOLA

Después de las elecciones

Por Geoff Thale

Las elecciones que tuvieron lugar en el otoño de 2004 le dieron a George W. Bush otro período de cuatro años como presidente de Estados Unidos, y presentaron un Congreso con un sesgo levemente más conservador. Bush hizo varios cambios de gabinete, y el nuevo Congreso modificó la composición de las comisiones legislativas que son importantes a la hora de definir la política estadounidense hacia América Latina. Pero todos estos cambios pos-electorarios seguramente tendrán escasa incidencia en la política oficial.

El problema de política exterior más importante de la campaña presidencial fue la guerra de EE.UU. en Irak. La política hacia Latinoamérica no fue un tema central de debate. La política hacia Cuba sí lo fue en Florida, donde la línea dura del Presidente le costó algunos votos entre los cubano-americanos – pero no los suficientes como para inducirlo a reconsiderar su política. Tanto demócratas como republicanos trataron de ganar el cada vez más numeroso voto latino, pero ninguna de las campañas captó votos por el lado de la política hacia América Latina. Fue así que la administración Bush no tuvo, después de este proceso electoral, ninguna motivación política de peso para modificar la postura que había tenido con respecto a Latinoamérica en su primer período de gobierno, enfocada únicamente en expandir el libre comercio, combatir el narcotráfico, y en Colombia y Cuba.

Los cambios de gabinete que encaró el Presidente no indican que vaya a modificarse la política hacia América Latina. En el Pentágono no hubo ningún cambio drástico; siguen estando los mismos analistas de América Latina y oficiales del Comando Sur de EE.UU. insistiendo en la función que deben cumplir los militares en la lucha contra el narcotráfico y en otras “amenazas emergentes”. La recién nombrada Secretaria de Estado Condoleezza Rice nombró a varios diplomáticos de carrera en altos puestos, pero no hizo ningún cambio en el equipo de América Latina. El Secretario de Estado adjunto Roger Noriega sigue en su cargo, y no se avizora ningún cambio inminente en la política oficial.

Tras las elecciones hay un Congreso un poco más inclinado hacia la derecha, ya que hay una mayoría republicana un poco más numerosa en las dos cámaras. La victoria llevó a los legisladores republicanos a hablar de ingentes esfuerzos para propiciar una agenda política más conservadora. Pero su agenda es básicamente de carácter nacional, concentrada en medidas comerciales y en la privatización del sistema de seguridad social, más que en la política exterior.

A su vez, dentro del bando republicano las diferencias son más notorias que en los congresos anteriores. Comenzaron a trazarse líneas divisorias entre conservadores con inclinaciones comerciales, con motivaciones ideológicas y religiosas, y libertarios. Si bien todos los republicanos coincidirán en algunas cuestiones, la administración enfrentará cuestionamientos dentro de su propio partido en temas tan diversos como la política hacia Irak y la seguridad social.

El resultado de todo esto es que es poco probable que el Congreso impulse cambios de importancia en la política hacia Latinoamérica en este período de gobierno. El liderazgo republicano del subcomité de Asuntos del

— Continuará en la página 9

WOLA Junta Directiva

Joe Eldridge, *Presidente*
American University

William Leogrande, *Vice-Presidente*
American University

Richard Erstad, *Secretario y Tesorero*
American Friends Service Committee

Martín Coria
Church World Service

Charles Currie, SJ
Association of Jesuit Colleges and Universities

Benjamin Davis,
Solidarity Center, AFL-CIO

Marie Dennis
Maryknoll Office for Global Concerns

Ralph Fine
Abogado

Seamus Finn, OMI
Oblates of Mary Immaculate

Kathy Gille
Ex-Asesora, U.S. House of Representatives

Louis W. Goodman
American University

Franklin Knight
Johns Hopkins University

Danuta Lockett
Victims of Torture Fund

Cynthia McClintock
The George Washington University

Cecilia Muñoz
National Council of La Raza

Joy Olson
Washington Office on Latin America

Greg Ratliff
Aspen Institute

Margaret Roggensack
Abogada

Lars Schoultz
University of North Carolina, Chapel Hill

Alex Wilde
Santiago, Chile

Silvia Wilhelm
Puentes Cubanos

Lee Zeigler
Ex-Director, Stanford University

CON SABATICO:

Lisa Fuentes
American University

La agenda de comercio y desarrollo

por Jeff Vogt

En su segundo período, la administración Bush continuará impulsando la firma de más tratados de libre comercio en las Américas. En mayo de 2004, EE.UU. firmó el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y la República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), aunque aún tiene que ser enviado al Congreso para su ratificación. Negociadores estadounidenses también siguen adelante con el proyecto de un Tratado de Libre Comercio Andino (AFTA, por sus siglas en inglés) con Colombia, Ecuador y Perú, y de un Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Panamá. La preponderancia de los tratados bilaterales es observada como un intento por instalar el marco para el hemisférico Tratado de Libre Comercio de las Américas (FTAA, por sus siglas en inglés), que se desbarató a fines de 2003 cuando un conjunto de naciones lideradas por Brasil se opuso a varios de los puntos de negociación de EE.UU.

En 2005, WOLA seguirá observando de cerca estas negociaciones comerciales y sus posibles efectos en la región. Seguiremos relacionándonos con los gestores de políticas y propiciaremos la incorporación de disposiciones que son vitales para entablar una relación comercial más justa entre Estados Unidos y las naciones de Latinoamérica – una relación que fomente -en lugar de obstaculizar- el desarrollo en base al respeto de los derechos culturales, sociales y económicos.

En particular, WOLA continuará enfocando sus esfuerzos en el sector rural, el cual tradicionalmente es el más pobre y políticamente marginado de cualquier país. Lo bien o mal que le vaya al sector rural en los tratados de comercio determinará en gran medida la suerte de todo el país. Si los tratados de comercio tienen por efecto debilitar al sector de pequeños productores agrícolas, por ejemplo, lo más probable es que haya una mayor migración del campo hacia los centros urbanos, donde los trabajadores rurales desplazados intentarán conseguir empleo. Pero, ¿qué tipo de empleo se les podrá ofrecer ahora y en el futuro? Actualmente, muchos de esos trabajadores ingresan a la economía informal y viven en comunidades marginales. Ninguna de estas personas puede disfrutar de su derecho a tener un sustento adecuado. La defensa de sus derechos seguirá siendo un objetivo primordial de WOLA.

El problema del comercio agrícola es uno de los temas más polémicos tanto en EE.UU. y como en América Central y la región andina. La resistencia a los tratados de comercio propuestos se funda en serios cuestionamientos sobre los riesgos que se presentan para la seguridad alimentaria, el empleo rural y los derechos laborales. La decisión de bajar las barreras comerciales para los productos agrícolas, que sería acelerada por los tratados presentados, seguirá minando a los pequeños productores que subsisten de sus ingresos y a las economías rurales de toda Centroamérica y de la región andina, particularmente a los agricultores que tienen cultivos que compiten con productos altamente subsidiados por EE.UU. Según un estudio de la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU., una vez que rija totalmente el CAFTA, América Central pasará a exportar a EE.UU. menos productos agrícolas en lugar de más¹. El relator de las Naciones Unidas para el derecho alimentario, Jean Ziegler, concluyó que después de la implementación del tratado, pasarían hambre aún más guatemaltecos, ello debido a las asimetrías económicas que existen entre los dos países². En la región andina, el Ministro de Agricultura de Colombia predijo en julio de 2004 que el AFTA, tal como estaba planeado, significaría un 35 por ciento menos de empleo rural dentro de los sectores que producen cereales básicos³.

El costo rural en la región andina se complica aún más con el narcotráfico y el conflicto armado interno que existen en Colombia. El propio informe del gobierno colombiano concluyó que “[Si] . . . Colombia [no toma] medidas suficientes en defensa y apoyo de los productores agrícolas, podrían agravarse los problemas rurales y muchos

1 Comisión de Comercio Internacional de EE.UU., *Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y República Dominicana – América Central: Potenciales efectos en la economía general y en determinados sectores*, agosto 2004, pp. 59-72

2 Gema Palencia, “Relator Alarmado por Hambre en el País,” *Prensa Libre*, 5 febrero 2005.

3 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, *La agricultura colombiana antes del tratado de libre comercio con Estados Unidos*, julio 2004, p. 180.

de sus habitantes sólo tendrían tres opciones: migrar a las ciudades u otros países (especialmente a Estados Unidos), trabajar en las zonas de cultivo de drogas, o unirse a los grupos armados ilegales”⁴.

La segunda prioridad de WOLA son los derechos laborales, entendiendo por ellos la inclusión en los tratados de comercio de cláusulas laborales enérgicas y que puedan hacerse valer, la mejora de los códigos de trabajo nacionales y un mejor cumplimiento de las leyes laborales. Lamentablemente, la cláusula laboral inserta en el DR-CAFTA no hace más que exigir a los países que hagan cumplir sus propios e inadecuados códigos de trabajo. La cláusula laboral es tan débil en realidad, que el ex representante comercial de EE.UU., Mickey Kantor, un enérgico defensor de los tratados de libre comercio, dijo que en esos términos no podía estar a favor del DR-CAFTA⁵.

En el contexto del debate del CAFTA, WOLA pre-

posibilidades de que en el nuevo 109° Congreso se presente una agenda justa de comercio. La administración ha retrasado el envío del tratado DR-CAFTA para su ratificación por reconocer que no cuenta con los votos necesarios para su aprobación. La oposición es bipartidista. El AFTA también parece tener problemas debido a la resistencia de la región andina a aceptar varias de las condiciones de EE.UU. y a los temores que alberga el Congreso por la posibilidad de que el tratado termine exacerbando el narcotráfico y el conflicto armado interno en Colombia, y también por la extrema debilidad de sus cláusulas de derechos laborales en una región donde constantemente son asesinados dirigentes sindicales.

Aparte del comercio, en 2005 WOLA trabajará para restablecer la tan necesaria asistencia económica a América Latina, la cual ha ido disminuyendo notablemente después del pico al que llegó en 1985, mientras ha aumentado progresivamente la asistencia militar y policial. Sin embargo, el

La decisión de bajar las barreras comerciales para los productos agrícolas, que sería acelerada por los tratados presentados, seguirá minando a los pequeños productores que subsisten de sus ingresos y a las economías rurales de toda Centroamérica y de la región andina...

sentó una petición ante la oficina del Representante Comercial de EE.UU.(USTR, por sus siglas en inglés) en el mes de diciembre, exigiendo el análisis de las leyes laborales y las violaciones a los derechos laborales de Guatemala bajo la luz de las actuales leyes de comercio. En el marco de revisiones anteriores, Guatemala prometió importantes reformas en sus leyes laborales, un considerable aumento del presupuesto del Ministerio de Trabajo y un mayor cumplimiento de sus leyes. Pero Guatemala no hizo ninguna de estas tres cosas: las leyes siguen iguales, el presupuesto es muy inferior al prometido, y créase o no, al cuerpo de inspectores se le despojó de su autoridad para imponer multas administrativas, con lo cual ya nadie cuenta con autoridad para sancionar a los violadores. Hay varios casos de violencia contra activistas gremiales que también siguen sin investigarse o sin resolverse, otro reflejo del contexto generalizado de impunidad que reina en el país. En el momento en que esto iba a impresión, circulaba por el Congreso una carta de adhesión legislativa a favor de la petición.

A pesar del decidido apoyo al comercio que da la administración Bush, tenemos algunas reservas sobre las

Fondo de Inversión Social y Desarrollo Económico para las Américas, un proyecto de ley presentado por el diputado Bob Menendez (demócrata por Nueva Jersey) y el senador Christopher Dodd (demócrata por Connecticut) resolvería el faltante destinando a Latinoamérica otros 500 millones de dólares anuales de asistencia económica durante cinco años. Este proyecto de ley impondría como requisito que los fondos sean utilizados para fortalecer el estado de Derecho a través de una mayor eficiencia y transparencia de los servicios del gobierno, y para reducir la pobreza y terminar con la exclusión de las poblaciones marginadas. También incluye disposiciones que obligarían a realizar una consulta pública para todos los proyectos que reciban financiamiento. WOLA, junto con diversas e importantes organizaciones de desarrollo y latinas, apoya firmemente esta propuesta.

Si bien el camino que falta recorrer será, indudablemente difícil, estamos seguros de que ejerceremos influencia en el debate de políticas en 2005 y que propiciaremos políticas de comercio y desarrollo que sean más justas y más beneficiosas para la población pobre y marginada de América Latina.

4 *Ibidem*.

5 Declaración hecha en la conferencia “Política comercial en 2005” en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, 9 febrero 2005. La transcripción completa de la conferencia puede obtenerse en www.csis.org

Desafíos en Colombia

por John Walsh

Desde el 2000, Estados Unidos viene invirtiendo 4,5 mil millones de dólares en el Plan Colombia, con el fin de reducir los cultivos de drogas, fortalecer el respeto a los derechos humanos y el estado de Derecho y promover la paz. Próximo al vencimiento del Plan Colombia, hay legisladores que anticipan una evolución en la política de EE.UU., siendo uno de sus aspectos un mejor equilibrio entre la asistencia para la seguridad (elemento predominante hasta ahora) y la asistencia social y económica.

Pero las expectativas de una transición fueron desbaratadas por la solicitud de asistencia para el año fiscal 2006 de la administración Bush, que prácticamente es idéntica a la de los últimos

bajos que nunca. Dentro de Colombia, la estabilidad de los precios de la base de cocaína hace pensar que la reducción de la producción de coca con las campañas de fumigación no tuvo, en los hechos, la magnitud que indican los datos satelitales, a pesar de que los cultivos están más dispersos ahora. Además, la dispersión de los cultivos debido a la fumigación elevó el costo de erradicación de cada hectárea. Más que nada, la campaña de fumigación echó por tierra iniciativas de desarrollo alternativo, con lo cual miles de agricultores no tuvieron otra opción que retomar sus cultivos en otras partes. Es interesante destacar que las considerables y perdurables reducciones de los cultivos de coca en Putumayo se lograron, en gran medida, con inversiones especifi-

Después de todo lo que hizo para fortalecer a los militares colombianos, Estados Unidos debe darse cuenta de que el fin del conflicto tendrá que intentarse en la mesa de negociación, y debe presionar tanto al gobierno colombiano como a los insurgentes a aprovechar toda y cualquier oportunidad que surja para retomar negociaciones serias.

años. La administración pretende obtener \$463 millones en el marco de la Iniciativa Andina Antinarcóticos (ACI, por sus siglas en inglés), \$ 90 millones en la partida de Financiación para Fuerzas Militares Extranjeras (FMF, por sus siglas en inglés), y algunas decenas de millones en el presupuesto anti-narcóticos del Departamento de Defensa. En esta nueva solicitud, los fondos de asistencia para seguridad y asistencia social/económica siguen repartidos en una proporción de 80 y 20 por ciento.

Mientras el Congreso analiza si aguantar o no hasta el final en Colombia, son muchas las preocupaciones por el hecho de que los objetivos del Plan Colombia están lejos de ser alcanzados y de que se necesitarán diferentes estrategias para que la ya considerable inversión de EE.UU. en Colombia realmente genere dividendos. En ocasión del debate que tendrá lugar este año, WOLA abogará por nuevos rumbos en la política estadounidense para temas cruciales como lo es el éxito a largo plazo en Colombia.

Reducción del comercio de drogas. A pesar de la considerable reducción de las superficies de cultivo de coca en Colombia que se informó en los últimos años, la cocaína todavía puede conseguirse fácilmente en las calles de EE.UU., a precios más

cas en proyectos de desarrollo y erradicación manual. Para una reducción sostenida de los cultivos de drogas, se necesitarán medidas con todas las de la ley de parte de los gobiernos de EE.UU. y Colombia que impulsen el desarrollo alternativo dentro de una estrategia sensata de desarrollo rural integral, y poner fin al costoso y controvertido programa de fumigación aérea.

Negociaciones de paz. A pesar del rótulo de la “guerra contra el terrorismo” que se puso a partir del 11 de septiembre de 2001, el predicamento de Colombia sigue siendo el de un conflicto armado interno. El año pasado, la importante ofensiva militar colombiana, llamada el “Plan Patriota”, despertó ilusiones de que las FARC empezarían a sufrir pérdidas significantes y que las irían debilitando día a día. No obstante, las FARC conservan el control de gran parte del sur del país y su estructura de comando está intacta. Los importantes contraataques de las FARC a principios de 2005 hicieron saber a los colombianos que la guerrilla sigue siendo una fuerza a tener en cuenta, y que el conflicto armado no tendrá un final rápido mediante la fuerza de las armas.

Subestimando la resistencia de los insurgentes, Washington confió demasiado en una solu-

ción militar al conflicto que lleva décadas en Colombia. En 2004, el general del Comando Sur James Hill pronosticó que para el 2006 las FARC “no tendrían capacidad de combate”. Al mismo tiempo, el entusiasmo de Washington por intensificar su asistencia militar para librar en Colombia una “guerra contra las drogas” conjuntamente con una “guerra contra el terrorismo” generó en el gobierno colombiano pocos incentivos para retomar las negociaciones con los insurgentes. El enfoque militarizado unidimensional tiene sus límites. Después de todo lo que hizo para fortalecer a los militares colombianos, Estados Unidos debe darse cuenta de que el fin del conflicto tendrá que intentarse en la mesa de negociación, y debe presionar tanto al gobierno colombiano como a los insurgentes a aprovechar toda y cualquier oportunidad que surja para retomar negociaciones serias. El gobierno de Estados Unidos también debería ofrecer asistencia financiera para la concreción de un proceso de paz con los grupos guerrilleros, en condiciones que garanticen la verdad, la justicia y la indemnización a las víctimas de violaciones al derecho internacional humanitario.

Desmantelamiento de los paramilitares

En realidad, el gobierno colombiano está negociando la desmovilización de uno de los grupos armados ilegales del país – las fuerzas paramilitares de derecha, vagamente organizadas bajo la protección de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Si bien la desmovilización de los militares sería bienvenida, este proceso se está llevando a cabo con muchas imperfecciones que podrían socavar aún más el estado de Derecho, consolidar al crimen organizado y perpetuar la impunidad que impera en Colombia.

Si bien el proceso de desmovilización empezó en el 2003, no existe aún ningún marco legal que garantice la determinación de la responsabilidad de los altos mandos por delitos

cometidos, ya sea que se trate de violaciones a los derechos humanos o narcotráfico, ni que obligue a devolver al Estado las ganancias mal habidas. En un proyecto de ley redactado por un grupo multipartidario de legisladores, se contemplan sentencias menores pero los beneficiados con estas reducciones de pena estarían obligados a confesar sus delitos, y a explicar la estructura y el funcionamiento de las redes paramilitares, con el objeto de desmantelar completamente este fenómeno. El presidente Uribe se opuso a estas disposiciones claves. Tampoco existe un mecanismo que garantice que los desmovilizados no vuelvan al campo de batalla, ni una estrategia a largo plazo para incorporarlos a la economía legal. Asimismo no ha explicado cómo hará para brindar seguridad en las zonas previamente bajo control de los paramilitares. Tal como está estructurada actualmente, la desmovilización tendrá por efecto la mera legalización de combatientes paramilitares y una mayor consolidación del poder de lo que, en esencia, es el crimen organizado. Los paramilitares ya se adjudican el control de un tercio del Congreso colombiano, y constituyen una presencia dominante en importantes regiones del país, entre las que está la costa del Atlántico.

A pesar de estas serias imperfecciones, la embajada de EE.UU. sigue apoyando las desmovilizaciones. Washington debe dejar en claro que su meta es el desmantelamiento completo de los paramilitares, y que para obtener el apoyo político y financiero de EE.UU., Colombia debe elaborar y poner en práctica un marco legal eficaz, acorde con los patrones internacionales de respeto a los derechos humanos, que garantice la paz, la justicia y la indemnización de las víctimas. Estados Unidos también debería bogar por una comisión de la verdad independiente, que es esencial para aclarar la responsabilidad y participación del Estado en las atrocidades cometidas por los paramilitares.

Trabajo en las Políticas de Washington

◆ La publicación de **Drogas y democracia en América Latina: El impacto de la política de Estados Unidos** fue uno de los hechos destacados de 2004. La culminación de un proyecto de investigación de tres años, por temas y por países, a cargo de investigadores estadounidenses y latinoamericanos. El libro estuvo acompañado de la publicación de un nuevo *Drug War Monitor*, “¿Aún estamos ahí? Medición de los avances de la guerra contra las drogas de Estados Unidos en América Latina”. Este informe critica los indicadores que se usan normalmente para medir el éxito de los programas de control de drogas por el lado de la oferta y presenta nuevos datos que confirman el fracaso absoluto de los intentos de reducir la oferta de drogas o de hacer subir su precio de venta en las calles de EE.UU. WOLA convocó a una conferencia de prensa y organizó una sesión legislativa muy numerosa para presentar los resultados del proyecto y renovar el debate en torno a la política de control de drogas de EE.UU. Durante el 2005, WOLA viajará con el libro por EE.UU. y América Latina. Las primeras paradas serán Miami y Chicago, y después habrá más.

◆ En el verano, WOLA y sus colegas de derechos humanos se opusieron al proyecto de la administración Bush de elevar los límites de efectivos y contratistas estadounidenses para **Colombia**. Se trata de límites a la cantidad de personal que podría destinarse a Colombia en un determinado momento, para impedir caer inexorablemente en otro conflicto armado interno. La defensa de estos límites sirvió para asegurar la aprobación en la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de la enmienda que propuso el diputado Gene Taylor (demócrata por Mississippi) para hacer dar marcha atrás al aumento propuesto por la Casa Blanca. Una enmienda similar del senador Byrd propició un fuerte debate. Si bien no fue sancionada, obtuvo la considerable cantidad de 40 votos a favor. La enmienda Taylor fue eliminada en la conferencia, pero el trabajo silencioso de WOLA sirvió para enviar un claro mensaje de que el Congreso tiene serias dudas en cuanto a intensificar la intervención militar estadounidense en Colombia.

◆ Con el objeto de asegurar la determinación de responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos de **Colombia**, WOLA envió una propuesta de redacción legislativa que impone condiciones al otorgamiento futuro de cualquier asistencia financiera de Estados Unidos destinada al proceso de desmovilización paramilitar de **Colombia**. Las condiciones aparecieron en el texto de la ley del presupuesto para operativos extranjeros del año fiscal 2005. Si bien no son obligatorias, dejan bien en claro que cualquier

proceso de desmovilización de actores armados que hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos en Colombia debe regirse por los principios de la verdad, justicia y reparación a las víctimas.

◆ Mediante un trabajo de análisis y educación pública, en 2004 WOLA defendió abiertamente diversos intentos legislativos de aliviar el embargo contra **Cuba**. La Cámara Baja sancionó tres enmiendas al proyecto de ley de presupuesto de transporte-Tesoro para levantar las últimas restricciones que se impusieron, que limitaban seriamente los viajes de estudios, las visitas de familiares cubano-americanos y la asistencia humanitaria. La versión del Senado del proyecto de ley incluyó disposiciones para terminar con la prohibición de viajes. Al igual que en años anteriores, a pesar de las claras mayorías que estuvieron a favor en ambas cámaras del Congreso, los republicanos eliminaron estas disposiciones de los proyectos de ley definitivos que se enviaron al presidente Bush.

Presentación de voces latinoamericanas

◆ En el mes de junio, cinco obispos centroamericanos viajaron a Washington para debatir sobre el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA) en el contexto más amplio del desarrollo social y económico de la región. Los obispos plantearon sus preocupaciones sobre la repercusión que podría tener el CAFTA en el sector agrícola, en los derechos laborales y en el medio ambiente, y sobre la falta de participación pública en el proceso de negociación. La Secretaría del Sínodo de Obispos de América Central y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB por sus siglas en inglés) resumieron sus



Presentación del libro *Drogas y democracia en América Latina: El impacto de la política de Estados Unidos* en el National Press Club

preocupaciones en una declaración conjunta. Los obispos se reunieron con legisladores, instituciones multilaterales y personal de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. WOLA, Servicios Católicos de Socorro y la USCCB organizaron una reunión con más de 20 ONG para compartir los análisis realizados y debatir sobre su colaboración en el futuro. En el mes de septiembre, el obispo Medardo Gómez volvió a viajar a Washington. WOLA y la Fundación SHARE coordinaron sus reuniones en el Congreso para discutir sobre la repercusión del CAFTA en las pequeñas comunidades rurales de El Salvador.

- ◆ En ocasión de las sesiones de octubre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR), WOLA organizó presentaciones públicas y una recepción y coordinó visitas de los defensores de **derechos humanos** de toda la región. Entre los puntos más destacados estuvo el encuentro con la *Coordinadora Nacional de Derechos Humanos* que giró en torno al estado de instrumentación de las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú; la charla que dio el *Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan* sobre el conflictivo estado de Guerrero; y un debate sobre la integración económica y los derechos humanos con el *Centro ProDH* de México. En sus visitas al Congreso, al Departamento de Estado y a instituciones multilaterales, los defensores de derechos humanos de la región plantearon sus preocupaciones a legisladores y funcionarios. Helen Mack de la Fundación Myrna Mack y Claudia Samayoa del CIACS viajaron luego a Nueva York para reunirse con las Naciones Unidas, varias ONG y la prensa.

- ◆ WOLA auspició la visita de noviembre del senador colombiano Jorge Enrique Robledo, quien vino para debatir sobre los efectos del Tratado de Libre Comercio Andino (AFTA) en la agricultura de Colombia. En sus reuniones con legisladores, Robledo insistió en que la profundización de la crisis rural en su país podía socavar los esfuerzos que se venían realizando por reducir la producción de drogas ilegales y por terminar con el conflicto armado que esta asolando a su país.

- ◆ WOLA organizó **reuniones para organizaciones colegas latinoamericanas** destinadas a compartir ideas con organizaciones defensoras y comunidades religiosas estadounidenses. Fue así que, en septiembre, se hicieron mesas redondas con el INESC, la REBRIP, y Rede Brasil para debatir sobre las políticas del gobierno brasileño en materia de comercio e integración regional. En el mes de octubre, Oscar Ortiz, el alcalde de Santa Tecla, analizó los debates dentro del FMLN y la postura del FMLN en torno a las relaciones EE.UU.-El Salvador, incluyó el comercio.

- ◆ WOLA coordinó la participación de analistas lati-



“Cuba después de Castro”, presentación en el congreso de EE. UU. Sobre el futuro impacto de diversos sectores en Cuba

noamericanos en el 25º Congreso de la **Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA)**, en Las Vegas en el mes de octubre. Se organizaron mesas redondas para debatir sobre las organizaciones clandestinas de Guatemala y sobre los cambios en el concepto de seguridad hemisférica, como también un panel sobre *Drogas y Democracia en América Latina*. Entre los participantes figuraron Iduvina Hernández, de la Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM), Claudia Samayoa, del CIACS, y Javier Hernández, de MINUGUA, Guatemala; Álvaro Camacho, de la U. de Los Andes, Colombia; José Zacchi, de Viva Río, Brasil; Rut Diamint, de la U. di Tella, Argentina; Isabel Jaramillo, de CEA, Cuba; e Isaías Rojas, de Perú. También participó Cristina Eguizabal, de la Fundación Ford. Cuando la administración Bush tomó la decisión de neto corte político de negarle visas a todos los especialistas cubanos cuya asistencia estaba programada, se tuvo que cancelar un cuarto panel sobre la política social de Cuba. (Isabel Jaramillo, mencionada arriba, vive en Cuba pero tiene ciudadanía chilena).

WOLA en América Latina

- ◆ En agosto, soldados colombianos ejecutaron a sangre fría a tres sindicalistas en Saravena, Arauca. Luego de esta masacre, defensores de derechos humanos invitaron a Kimberly Stanton a participar de las celebraciones por el Día Nacional de los Derechos Humanos de **Colombia**, el 9 de septiembre. La fecha cayó cerca del primer aniversario del discurso del presidente Uribe donde se refirió a las organizaciones de derechos humanos como “politiqueros al servicio del terrorismo”. Viajando desde Tame, minutos después de pasar por un puesto de control militar, el auto que transportaba a Kim y activistas de derechos humanos de Bogotá se topó con una barricada paramilitar en la que murieron dos personas. En

Saravena, la zona reservada para conmemorar el día de los derechos humanos fue cercada por soldados en posición de combate. WOLA denunció esta presencia de paramilitares a las autoridades colombianas, les preguntó por qué había efectivos desplegados que intimidaban una celebración legal de la sociedad civil, y pidió que se investigaran los asesinatos, incluso la participación de la unidad militar encargada de proteger la vía pública. Hasta la fecha, no hubo respuesta.

- ◆ En agosto, Laurie Freeman viajó a Ciudad Juárez y Chihuahua, **México**, con asesores legislativos de la diputada Hilda Solís (demócrata por California) y del senador Jeff Bingaman (demócrata por Nuevo México) para hablar sobre los asesinatos de mujeres en Juárez con los familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y funcionarios del gobierno mexicano, y empezar un proyecto sobre el derecho a reparación de los familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas, con la clínica jurídica de derechos humanos internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte. En noviembre, Laurie Freeman volvió a Ciudad Juárez y Chihuahua con un representante del Fondo Voluntario para Víctimas de Tortura para investigar las posibilidades de brindar asistencia legal y mental a sobrevivientes de actos de tortura y a los familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas.
- ◆ En el mes de octubre, y en el marco de una iniciativa de analizar los cambios que se produjeron en los paradigmas de **seguridad** del hemisferio, WOLA, la Red de Derechos Humanos SUR y Viva Río convocaron un Seminario sobre Derechos Humanos y Seguridad en San Pablo, Brasil. Su objetivo era promover un intercambio de opiniones entre la sociedad civil, funcionarios del gobierno y especialistas, sobre la necesidad de incluir en el debate de seguridad a los derechos humanos y democracia. Los temas centrales fueron la “segurización” del orden público y la “militarización” de la seguridad pública en América Latina, y las estrategias para enfrentar estos fenómenos. Este encuentro fortaleció la comunicación y cooperación entre las organizaciones que trabajan en favor de los derechos humanos y la seguridad en todo el hemisferio.
- ◆ A continuación del seminario de Brasil, en el mes de noviembre, WOLA participó como observador civil de la VI Reunión de Ministros de Defensa de las Américas, que tuvo lugar en Quito, una oportunidad que se da por primera vez. Gastón Chiller coordinó la presentación de una declaración, firmada por más de 150 asociaciones civiles de la región, y logró que la declaración de Quito incluyera disposiciones sobre Derecho internacional

de derechos humanos, y evitara una definición de **seguridad** que siga confundiendo la línea divisoria entre las funciones de los militares y las de las fuerzas policiales nacionales.

- ◆ En el mes de septiembre, Adriana Beltrán y Geoff Thale viajaron a **Guatemala** en ocasión de la presentación de *Poderes ocultos en la Guatemala post-conflicto*, la publicación de WOLA donde se analiza la vinculación de grupos clandestinos con el crimen organizado. Morris Panner, ex jefe de la Sección Narcóticos del Departamento de Justicia de EE.UU. y Vladan Bonifacic, representante de las fuerzas policiales serbias y representante de Iniciativa de Cooperación de Europa Sudoriental, dos expertos en el crimen organizado, ratificaron la importancia que tiene la investigación de estos grupos para garantizar la paz y seguridad en Guatemala. En forma paralela a esta presentación pública, WOLA organizó reuniones entre los especialistas y representantes de la prensa, de la comunidad internacional y varias ONG.
- ◆ Para abordar a América Latina desde la perspectiva de los **temas comerciales y económicos**, Jeffrey Vogt viajó a Brasil en el mes de agosto, para participar en una conferencia del Consejo Latinoamericano de Iglesias, en la cual ayudó a forjar una posición común en temas económicos y comerciales. Jeff también se reunió con sindicatos y varias ONG de San Pablo para conocer un poco más la postura brasileña en las cuestiones de desarrollo económico, integración regional y comercio. En el mes de octubre, Jeff participó en una conferencia regional sobre comercial internacional y desarrollo, que tuvo lugar en Bolivia, otro avance hacia el fortalecimiento de las relaciones con los grupos de desarrollo de la región. Estando en La Paz, aprovechó la oportunidad para evaluar la situación de Bolivia un año después de la caída del presidente Sánchez de Lozada.

WOLA en las noticias

- ◆ En julio, WOLA, LAWG y el Instituto Velázquez encargaron una encuesta entre los cubano-americanos del sur de Florida para conocer su opinión sobre la política estadounidense hacia **Cuba** y sobre las nuevas restricciones que impuso la administración Bush. La encuesta arrojó que los cubano-americanos más jóvenes y los inmigrantes recientes son menos propensos a apoyar el embargo. Debido a la dinámica cambiante, los políticos ya no pueden confiar en el dogma de que toda la comunidad está a favor de una política de línea dura. Después de una conferencia de prensa en el National Press Club, fueron varios los que citaron a Geoff Thale diciendo, “La actual política de aislar a Cuba con el embargo y otras medidas es un rotundo fracaso. Una acercamiento al régimen comunista y el levantamiento de las restricciones impuestas al comercio y a los viajes sería, en cambio, más útil para propiciar reformas en Cuba”.

Después de las elecciones — Viene de la página 1

Hemisferio Occidental del comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes pasó a manos del diputado Dan Burton (de Indiana), un conservador dogmático. Es posible que Burton convoque audiencias para tratar temas controvertidos e inicie un poco de debate, pero no se prevén cambios programáticos. El subcomité de presupuestos de la Cámara de Representantes, que es el que dispone la cuantía de la asistencia extranjera, tiene el mismo liderazgo desde

hace varios períodos. En el Senado no hubo cambios de liderazgo importantes.

Las elecciones de 2004 hacen pensar que habrá más de lo mismo en cuanto a la política de EE.UU. hacia Latinoamérica.

Autoridad de la guerra contra las drogas

por Laurie Freeman

En 1988, el Congreso de EE.UU. asignó al Departamento de Defensa la “responsabilidad primordial” de detectar y controlar el tránsito de drogas ilegales hacia Estados Unidos por aire o por mar. Dos años más tarde, el Congreso incorporó una disposición provisoria que le daba al Departamento de Defensa una autorización limitada para prestar asistencia antidrogas a fuerzas militares y policiales extranjeras. Esta disposición, conocida como “la Sección 1004” de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 1991, permite al Pentágono utilizar su presupuesto para pagar diversos tipos de asistencia antidrogas. Si bien la Sección 1004 no le permite al Pentágono proporcionar armas o cualquier tipo de equipamiento, sí le permite brindar entrenamiento extensivo a fuerzas de seguridad extranjeras, incluidas las fuerzas policiales.

Varios años después, se incorporó a la autorización de defensa una nueva disposición, conocida como la “Sección 1033”, autorizando al Pentágono a prestar apoyo fluvial a Colombia y Perú

pamiento” que figuran en las Secciones 1004 y 1033 no son permanentes, sino que deben renovarse después de unos pocos años. La renovación de ambas tiene lugar este año en la Autorización de Defensa Nacional de 2006. WOLA recomienda que el Congreso:

- ◆ **Revoque la Sección 1004(b)(5) de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 1994, donde se autoriza al Pentágono brindar entrenamiento y asistencia antidrogas a fuerzas de seguridad extranjeras. Especialmente cuestionable es la disposición de la Sección 1004 que permite a militares estadounidenses, en particular a las Fuerzas de Operativos Especiales, entrenar y asistir a fuerzas policiales extranjeras, confundiendo la línea divisoria de las funciones civiles y militares.** Ello podría tener implicaciones serias para los derechos humanos y la democracia de los países beneficiarios. Tailandia es el ejemplo más atroz: en la misma época en

Donald Rumsfeld... sostuvo que los operativos de control de drogas deberían apuntar a la demanda, porque “Si hay demanda, buscara cómo obtener lo que quiere. Y si no es de Colombia, será de cualquier otro lugar”

para la lucha contra las drogas. Con el tiempo pasó a incluir a otros países de la región andina y también de Asia central, y otras formas de asistencia antidrogas, aparte de la meramente fluvial.

La Sección 1004 se amplió de tal manera que se convirtió en uno de los programas de asistencia a fuerzas militares/policiales más grandes que contemplan las leyes de EE.UU. El año pasado, la Sección 1004 representó las dos terceras partes del entrenamiento militar extranjero en América Latina. Es decir, la cantidad de entrenamiento militar extranjero que paga directamente el Pentágono es superior a la de los programas tradicionales que paga y administra el Departamento de Estado. Los programas de entrenamiento del Departamento de Estado se rigen por la Ley de Asistencia Extranjera, y el Congreso ha impuesto una serie de exigencias de información, como también condiciones pertinentes a los derechos humanos y consolidación democrática. Pero el entrenamiento que paga directamente el Pentágono no es vigilado de cerca por el Congreso ni por la población, y no se controla el cumplimiento de la mayoría de las condiciones en el campo de los derechos humanos.

Las autoridades de “entrenamiento y equi-

que la policía tailandesa estaba implicada en violaciones masivas de los derechos humanos en medio de una guerra total que el gobierno libraba contra las drogas, las Fuerzas Especiales de EE.UU. brindaban entrenamiento en infantería liviana a cientos de policías antidrogas tailandeses. La *Posse Comitatus* reconoce que los militares y los policías deberían tener funciones diferentes. La revocación de la Sección 1004 (b)(5), que permite al Pentágono financiar el entrenamiento de fuerzas de seguridad extranjeras, no significaría la suspensión de asistencia a las fuerzas de seguridad extranjeras que emprenden actividades antidrogas, sino una garantía de que todo ese entrenamiento es financiado y administrado por autoridades civiles.

- ◆ **Reincorpore en los programas antidrogas de las Secciones 1004 y 1033 exigencias de información.** Actualmente, no se exige brindar al público ninguna información sobre los programas antidrogas del Departamento de Defensa. Sin esa información, no puede medirse el éxito de estos programas.

♦ **Evalúe seriamente la eficacia de la actual estrategia antidrogas de las fuerzas militares, y convoque audiencias sobre la guerra contra las drogas.** Los programas antidrogas financiados por la Sección 1004 son parte de una política general que no ha podido poner freno ni a la producción y tráfico internacional de drogas ni al consumo interno. El gobierno de EE.UU. ha invertido 25 años y 45 mil millones de dólares en una estrategia destinada a reducir la oferta de drogas para hacer subir su precio y desalentar el consumo. Esta política apunta ahora a Colombia, y específicamente a la erradicación forzada de los cultivos ilícitos. Pero los precios de la cocaína y heroína, que vienen bajando a paso constante desde mediados de la década de los 80, están en o cerca de sus mínimos históricos. En 1997, el año de la importante campaña de fumigación aérea en Colombia, el precio promedio de un gramo de cocaína en las calles de EE.UU. era de US\$ 145. A mediados de 2003, era de US\$ 106. El propio secretario de defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld, ha expresado su escepticismo sobre el uso de efectivos militares estadounidenses al frente de la lucha antidrogas a nivel internacional. En

sus audiencias de confirmación en el Senado, sostuvo que los operativos de control de drogas deberían apuntar a la demanda, porque “Si hay demanda, buscara cómo obtener lo que quiere. Y si no es de Colombia, será de cualquier otro lugar”¹. Más recientemente, insistió que “la lucha contra el narcotráfico no es algo que deba caer bajo la jurisdicción del Departamento de Defensa”². Las comisiones de servicios armados deberían celebrar audiencias legislativas sobre los operativos internacionales de control de drogas del Pentágono, a fin de dar respuesta a una serie de importantes preguntas: ¿Es conveniente, dadas las características del comercio de la droga, de la oferta y demanda? ¿Tiene sentido que intervenga el Pentágono, dadas las presiones que tienen actualmente las fuerzas militares estadounidenses? ¿Redujo la intervención de los militares estadounidenses en los operativos internacionales de control de drogas, el cultivo, tráfico o consumo de drogas? ¿Por qué se opone el Pentágono a la erradicación forzada en Afganistán, y no así en América Latina, a pesar de la falta de impacto en la oferta total de drogas?

1 Paul Richter, “Rumsfeld Says Drug War Should Start at Home,” (Rumsfeld dice que la guerra contra las drogas debería comenzar en casa) *Los Angeles Times*, 12 enero 2001, A9.

2 Secretario de defensa Donald H. Rumsfeld, comentarios en conferencia de prensa con el ministro de gobierno y justicia de la República de Panamá (Panamá, 13 noviembre 2004).

¡Queremos tu apoyo!

Sí, quiero contribuir a financiar el trabajo de WOLA para promover los derechos humanos, la democracia y la justicia social en América Latina. Adjunto una donación de:

\$200 \$100 \$75 \$50 \$35 \$ _____ (otro monto)

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____ País _____ Código Postal _____

Tel _____ Fax _____ Correo electrónico _____

WOLA es una organización sin fines de lucro y exenta de impuestos estadounidenses.

Favor de extender tu cheque a nombre de WOLA y enviado a:

1630 Connecticut Avenue NW, Suite 200, Washington DC 20009, USA

También se puede contribuir a través de nuestro sitio de Internet www.wola.org. ¡Gracias!

Personal de WOLA

Joy Olson

Directora Ejecutiva

Kimberly Stanton

Directora Adjunta y Directora de Investigación

Gastón Chillier

Representante Sénior, Derechos Humanos y Seguridad Pública

Geoff Thale

Representante Sénior, El Salvador, Cuba y Nicaragua

Jeff Vogt

Representante Sénior, Derechos y Desarrollo

John Walsh

Representante Sénior, Región Andina y Políticas Anti-Drogas

Eileen Rosin

Gerente, Proyecto Políticas Anti-Drogas

Adriana Beltrán

Representante, Guatemala y Coordinadora de Medios

Laurie Freeman

Representante, México y Políticas Anti-Drogas

Rachel Farley

Oficial de Programa, Cuba

Elsa Falkenburger

Asistente de Programa, Centroamérica, Cuba y Asuntos Económicos

Katie Malouf

Asistente de Programa, México, Región Andina, y Seguridad Pública

Ana Paula Duarte

Coordinadora, Desarrollo Financiero

Lori Piccolo

Representante, Desarrollo Financiero

Jason Schwartz

Gerente

Rachel Neild

Afiliada Sénior

Coletta Youngers

Afiliada Sénior



ENLACE

Washington Office on Latin America

1630 Connecticut Avenue, NW

Washington, DC 20009

Tel: 202.797.2171

Fax: 202.797.2172

Email: wola@wola.org

Web: www.wola.org



Washington Office on Latin America

1630 Connecticut Avenue, NW

Washington, DC 20009 USA

